Las disposiciones que se dicten en desarrollo de esta autorización, contemplarán, principalmente, los puntos que a continuación se expresan:

a) Que en la demarcación que se ordene, se escoja una línea divisoria arcifinia que siga de preferencia las corrientes de agua.

b) Que al disponerse lo conducente a la referida demarcación, se tengan en cuenta las necesidades que justifiquen en este caso el ensanche de un territorio municipal, por razón de conveniencias de orden administrativo, económico, fiscal, geográfico, social y político.

c) Que la nueva demarcación de líneas limítrofes intermunicipales tenga por principal objeto corregir los vicios y defectos de una línea divisoria anterior, notoriamente perjudicial para la marcha correcta de la administración, para el buen servicio público y para el comercio y desarrollo de aquel Municipio, cuya situación exija que se ordene en su favor la respectiva agregación de términos municipales; y

d) Que al ordenarse la demarcación contemplada en este artículo, el Distrito que sufra la segregación territorial a que haya lugar, quede con la base de población que el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 49 de 1931 señala para el caso de creación de Municipios.

ARTICULO 7° La Nación se reserva los derechos de dominio sobre los predios que ella considere necesarios para oficinas, escuelas, cárceles y demás servicios públicos nacionales.

ARTICULO 8° Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá a catorce de marzo de mil novecientos treinta y seis.

El Presidente del Senado, JOSE JOAQUIN CAICEDO CASTILLA—El Presidente de la Cámara de Representantes, PEDRO CASTRO MONSALVO—El Secretario del Senado, Rafael Campó A.—El Secretario de la Cámara de Representantes, Carlos Samper Sordo.

Poder Ejecutivo—Bogotá marzo 31 de 1936.

Publíquese y ejecútese,

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Gobierno,

Alberto LLERAS CAMARGO

El Ministro de Industrias y Trabajo,

G. MARTINEZ PEREZ

LEY 65 DE 1936

(marzo 31)

por la cual se dictan normas sobre abastecimiento de agua potable a los Municipios de la República y se conceden unas autorizaciones al Gobierno Nacional.

El Congreso de Colombia
decreta:

ARTICULO 1° Corresponde a los Concejos Municipales promover lo conducente para el abastecimiento de agua potable por medio de la instalación de acueductos, en los centros urbanos que tengan la categoría de cabecera de Municipio, cuando la población de éste pase de 3,000 habitantes y sea inferior a 20,000, número que se determinará de conformidad con los datos que arroja el censo levantado en el año de 1918.

El abastecimiento de agua potable contemplado en el presente artículo, constituye un servicio público fundamental, en el que cooperarán, para los fines de su organización y desarrollo, los Departamentos y la Nación, en la forma prescrita por la presente Ley.

ARTICULO 2° Para la efectividad de la cooperación que por el artículo anterior se impone respecto del esta-

blecimiento del mencionado servicio público, los Departamentos procederán a organizar una oficina técnica encargada de llevar a cabo los estudios, planos, presupuestos y especificaciones de las obras cuya construcción se considere indispensable dentro de sus respectivos territorios, con el fin de imprimir unidad al desarrollo del plan sobre dotación de agua potable, facilitando a la vez la labor que en tal sentido emprendan los Municipios interesados. Con ese objeto, los Departamentos apropiarán en sus presupuestos los recursos necesarios para la organización de tal oficina y el pleno cumplimiento de las funciones que les corresponden.

ARTICULO 3° Si los Departamentos contribuyen a la construcción de las obras a que se refiere esta Ley, con un aporte mínimo del veinte por ciento, y lo incluyen en sus presupuestos, y si para sistematizar la cooperación suprimen sus auxilios a obras de acueductos municipales, la Nación contribuirá a la realización de éstos conforme a lo que se prescribe en el artículo 6°

ARTICULO 4° A medida que vayan terminándose los estudios, planos, presupuestos y especificaciones de las obras, se acometerá la construcción de éstas bajo el control y dirección de la entidad que haga el mayor aporte; y para determinar su orden de prelación, se tomarán en cuenta la mayor urgencia de las obras, la importancia de la población y el número de habitantes del perímetro municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 9°, 10, 11 y 16 de la presente Ley.

Dentro de esta prelación se dará preferencia en primer lugar, a aquellos acueductos que favorezcan un mayor número de habitantes con un menor costo por cabeza.

PARAGRAFO. En los estudios de que se trata, se comprenderán el plano topográfico de la respectiva población y el de su desarrollo futuro.

ARTICULO 5° Si dentro de las normas concernientes a la administración de los asuntos seccionales se implantare por los Departamentos el sistema de **fondo rotativo**, destinado especialmente a la construcción de acueductos municipales, ya bajo la acción directa de los gobiernos departamentales, o bien para aplicarlo a contratos celebrados con los Municipios, ingresará a dicho fondo el aporte estipulado en el artículo 3° de esta Ley. Pero los contratos que en tal caso se celebren para la ejecución independiente de las obras, requieren para su perfeccionamiento y validez, que los estudios, planos, presupuestos y especificaciones correspondientes hayan sido aprobados previamente por la oficina técnica cuya organización se dispone en el artículo 2°, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 9°, 10, 11 y 16 de esta Ley.

ARTICULO 6° Establécese igualmente a cargo de la Nación el deber de cooperar en el desarrollo del servicio público fundamental contemplado en la presente Ley, y como consecuencia de tal obligación, contribuirá con un aporte del cincuenta por ciento (50 por 100) en el valor que corresponda a las obras, conforme a los proyectos elaborados o aprobados por las respectivas oficinas técnicas de los Departamentos, sin que el valor total de este aporte pueda pasar de treinta mil pesos (\$ 30,000) para cada obra.

PARAGRAFO. Para los efectos del aporte prescrito en este artículo, los estudios, planos, presupuestos y especificaciones de las obras respectivas se someterán al examen del Ministerio de Obras Públicas, como condición esencial que la Nación se reserva en el pago del referido aporte.

ARTICULO 7° En los Presupuestos de las próximas vigencias no podrán incluirse auxilios destinados a la construcción de acueductos municipales, salvo las apropiaciones que se refieran a los acueductos de los puertos terrestres o marítimos y a los de las ciudades de Bogotá, Pasto y Vélez.

Los Municipios a cuyo favor se hayan decretado auxilios para la construcción de acueductos podrán acogerse a las prescripciones de esta Ley, o, si lo prefieren, podrán optar por la percepción de tales auxilios, sujetos en su inversión al control del Gobierno Nacional.

En los mismos presupuestos se incluirá anualmente una partida global mínima de quinientos mil pesos (\$ 500,000), con destino al cumplimiento de lo prescrito en esta Ley.

PARAGRAFO. Las partidas que por concepto de auxilios para acueductos municipales se hayan apropiado en el Presupuesto Nacional correspondiente al año fiscal en curso, serán aplicadas de conformidad con lo establecido en la presente Ley a las obras para que fueron destinadas, y el Gobierno podrá disponer de tales apropiaciones con el fin de respaldar los contratos de empréstito y las operaciones de crédito cuya celebración se contempla adelante, si la inversión de los referidos auxilios no pudiera llevarse a cabo en el presente año con sujeción a los mandatos de esta Ley. En caso de que los mencionados contratos y operaciones de crédito no pudieren llevarse a término, las sumas procedentes de las apropiaciones respectivas se aplicarán a la formación de un fondo rotativo, con destino a la ejecución de las mismas obras dentro de las normas que para la ejecución aquí se prescriben.

ARTICULO 8° Si en una vigencia fiscal no pudieren invertirse los recursos apropiados para el cumplimiento de esta Ley, el Ministerio de Obras Públicas podrá adquirir bonos colombianos o cédulas hipotecarias, por el saldo que no se haya invertido, que enajenará en el año o años siguientes, para que sea efectiva en todo caso la cooperación anual de la Nación.

ARTICULO 9° De conformidad con los principios legales que disponen que las entidades de derecho público, así como las personas naturales o jurídicas, a cuyo favor haya otorgado u otorgue la Nación subvenciones o auxilios para la ejecución de obras de interés social están sujetas a la inspección del Estado, corresponde al Gobierno Nacional ejercer la debida vigilancia por razón del aporte con que la Nación está obligada a contribuir al fomento de los acueductos municipales. En tal virtud, autorizase al Gobierno para crear en el Ministerio de Obras Públicas una **Sección Especial de Acueductos** que tendrá a su cargo dicha supervigilancia, y a la cual podrá atribuirse la facultad de ordenar la verificación de los estudios técnicos a que hubiere lugar, como también la ejecución misma de las obras a que se refiere esta Ley, si previamente se llegare a un acuerdo sobre su construcción por cuenta directa de la Nación; mediante la celebración de los contratos respectivos que le permita llevar a término la necesaria financiación, sobre la base de los aportes que constituyan su contribución y la de los Departamentos y Municipios, caso en el cual queda también autorizado para crear las oficinas subalternas departamentales encargadas de los estudios, planos, presupuestos, especificaciones y construcción de las obras. El Gobierno determinará el personal y las asignaciones de los empleados que considere conveniente establecer en ejercicio de esta autorización.

ARTICULO 10. Si la ejecución de las obras se llevare a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, una vez construidos los acueductos y cancelada la deuda que se haya contraído por razón de empréstitos, serán entregados por la Nación a los Municipios y pasarán a ser propiedad de éstos con las siguientes reservas:

a) Los Municipios no podrán, en ningún tiempo, cobrar precio alguno por el servicio de agua potable en los edificios nacionales o en los destinados a la educación pública y a la beneficencia, como tampoco para otros servicios públicos nacionales distintos del de los ferrocarriles del Estado.

b) Las tarifas por el servicio de estos acueductos serán sometidas a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas, sin lo cual no podrán principiar a regir. Esta revisión tiene por objeto que las tarifas no sean tan altas que perjudiquen los intereses de los consumidores, ni tan bajas que no den los productos necesarios para el sostenimiento, reparación, conservación y mejora de las obras.

ARTICULO 11. En todos los acueductos a cuya construcción contribuya la Nación con la totalidad o una parte de su costo, en virtud de la presente Ley, o de otras especiales, se entenderá que la Nación se reserva en su favor el derecho de que trata el numeral a) del artículo anterior.

ARTICULO 12. En caso de que la construcción de las obras de que trata esta Ley se acometa, según lo previsto, por cuenta directa de la Nación, el Gobierno podrá llevarla a cabo por administración directa o delegada o por contrato.

ARTICULO 13. Decláranse de utilidad pública las obras a que se refiere la presente Ley.

ARTICULO 14. Autorízase al Gobierno Nacional para que separada o conjuntamente con los Departamentos y Municipios interesados celebre los contratos de empréstito y las operaciones de crédito que sea necesario llevar a término para los fines de esta Ley.

En dichos contratos podrán darse en garantía las obras mismas que vayan a construirse, sus productos y los aportes de la Nación, de los Departamentos, y de los Municipios.

El Banco Central Hipotecario, el Banco Agrícola Hipotecario, La Caja Colombiana de Ahorros y el Banco de la República quedan facultados para participar en los contratos y en las operaciones de crédito a que se refiere este artículo.

ARTICULO 15. Los contratos que celebre el Gobierno en desarrollo de la presente Ley, sólo requerirán para su validez el previo concepto favorable del Consejo de Ministros.

ARTICULO 16. En los Municipios cuya población actual exceda de 20,000 habitantes, la Nación participará en la construcción de sus acueductos con un cincuenta por ciento (50 por 100) del servicio del empréstito que se contraiga para la respectiva obra.

El Gobierno Nacional no podrá obligarse a amortizar por este concepto una cantidad mayor de ciento cincuenta mil pesos (\$ 150,000) para cada Municipio, y el plazo del empréstito no podrá ser menor de diez años.

La cantidad necesaria para el servicio del empréstito o empréstitos que se contraigan, se tomará de la partida global que de acuerdo con el artículo 7° de esta Ley se apropiará anualmente en los Presupuestos Nacionales.

Los Municipios que se encuentren dentro de las condiciones de este artículo, quedan sujetos a todos los requisitos de esta Ley.

PARAGRAFO. Los Municipios que en la actualidad están construyendo acueductos, gozarán de los beneficios de la presente Ley, siempre que acojan todas sus disposiciones.

ARTICULO 17. Esta Ley rige desde su sanción.

Dada en Bogotá a catorce de marzo de mil novecientos treinta y seis.

El Presidente del Senado, **BENJAMIN BURBANO**—El Presidente de la Cámara de Representantes, **GUSTAVO URIBE ALDANA**—El Secretario del Senado, **Rafael Campo A.**—El Secretario de la Cámara de Representantes, **Carlos Samper Sordo.**

Poder Ejecutivo—Bogotá marzo 31 de 1936.

Publíquese y ejecútese,

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Gobierno,

Alberto LLERAS CAMARGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Jorge SOTO DEL CORRAL

El Ministro de Obras Públicas,

César GARCIA ALVAREZ

MINISTERIO DE GOBIERNO

DECRETO NUMERO 695 DE 1936

(marzo 31)

por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en la Imprenta Nacional.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo 1º Por renuncia aceptada al señor Segismundo Alvear del puesto de Plagador, encargado del asco, nómbrase en su reemplazo al señor Jesús Suárez.

Artículo 2º Comuníquese al señor Pagador General del Ministerio de Gobierno para lo de su cargo.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá a 31 de marzo de 1936.

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Gobierno,

Alberto LLERAS CAMARGO

DECRETO NUMERO 707 DE 1936

(abril 1º)

por el cual se nombra Gobernador del Huila.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus atribuciones legales,

DECRETA:

Artículo único. Nómbrase Gobernador del Departamento del Huila al ingeniero Ricardo Dussán.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá a 1º de abril de 1936.

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Gobierno,

Alberto LLERAS CAMARGO

DECRETO NUMERO 712 DE 1936

(abril 2)

por el cual se aprueba el Decreto número 40 del corriente año, marzo 16, procedente del Intendente Nacional del Meta.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades,

DECRETA:

Artículo único. Apruébase el siguiente Decreto:

“DECRETO NUMERO 40 DE 1936

(marzo 16)

por el cual se reforma el artículo 3º del Decreto Intendencial número 104 del 12 de agosto de 1935, que creó el Corregimiento de Barranca de Upia.

El Intendente Nacional del Meta,
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que la Intendencia, por Decreto número 104 de fecha 12 de agosto de 1935, creó el Corregimiento de la Barranca de Upia, en el Municipio de Restrepo, y le fijó como limite por el Occidente con el Departamento de Cundinamarca, el río Cabuyarito hasta su confluencia con el caño de Yarico.

Que al rectificar el dicho limite sobre el terreno, por el suscrito Intendente en su reciente visita oficial, se observó que se había incurrido en un error, ya que el caño de Yarico desemboca en el río Humea y no en el río Cabuyarito,

DECRETA:

Artículo 1º El Corregimiento de la Barranca de Upia estará comprendido dentro de los mismos linderos que separan la Intendencia del Departamento de Boyacá, o sea, el río Upia por el Nordeste; por el Norte, con las últimas estribaciones de la Cordillera Oriental que la delimita con Cundinamarca; por el Occidente, con el mismo Departamento, el río Cabuyarito aguas abajo hasta su confluencia con el caño Ijoa; y de dicha confluencia, una línea recta a dar al río Upia, delimitándolo con el Corregimiento de Cabuyaro de esta Intendencia.

Artículo 2º Queda en estos términos reformado el artículo 3º del Decreto intendencial número 104 del 12 de agosto de 1935, aprobado por Decreto ejecutivo número 2345 de 1935, por el cual se elimina un Corregimiento y se crea otro.

Sométase a la aprobación del Ministerio de Gobierno, y si fuere aprobado, publíquese en la *Gaceta del Meta.*

Dado en Villavicencio, a diez y seis de marzo de mil novecientos treinta y seis.

El Intendente, *Eugenio Campo Sarria.*
El Secretario General, *Víctor J. Novoa.*

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá a 2 de abril de 1936.

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Gobierno,

Alberto LLERAS CAMARGO

DECRETO NUMERO 713 DE 1936

(abril 2)

por el cual se aprueba un Decreto dictado por el Gobernador del Departamento de Caldas.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. Apruébase el siguiente Decreto dictado por el Gobernador del Departamento de Caldas:

“DECRETO NUMERO 190 DE 1936

(marzo 24)

por el cual se hacen unos nombramientos y permutas en el ramo de Policía.

El Gobernador del Departamento,
en uso de sus facultades legales y por delegación del Ministerio de Gobierno,

DECRETA:

Artículo 1º Nómbrase Agente de tercera clase de la Policía Nacional—División Caldas—para el destacamento de Manizales, al señor Antonio José Velásquez Ramírez, en reemplazo de Daniel Castaño, cuyo nombramiento se declara insubsistente.

Artículo 2º Nómbrase Agente de tercera clase de la Policía Nacional—División Caldas—para el destacamento de Samaná, al señor Reinaldo Ossa, en reemplazo de Daniel María Quintero, quien presentó renuncia.

Artículo 3º Establécese permuta entre los Agentes de Policía José Manuel Vergara, de Pereira, y Ramón Antonio Hoyos, de Santuario de Caldas, de conformidad con el oficio número 1127 de 23 de los corrientes, procedente de la Comandancia de la Policía.

Comuníquese, consúltese con el señor Director General de la Policía Nacional y publíquese.

Dado en Manizales a veinticuatro de marzo de mil novecientos treinta y seis.

Enrique Gómez Latorre—El Secretario de Gobierno Hernando de la Calle.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá a 2 de abril de 1936.

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Gobierno,

Alberto LLERAS CAMARGO

DECRETO NUMERO 714 DE 1936

(abril 2)

por el cual se aprueba un Decreto dictado por el Gobernador del Departamento del Magdalena.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades legales,

DECRETA:

Artículo único. Apruébase el siguiente Decreto, dictado por el Gobernador del Departamento del Magdalena:

“DECRETO NUMERO 187 DE 1936

(marzo 25)

por el cual se hacen unos nombramientos.

El Gobernador del Departamento del Magdalena,

en uso de las facultades conferidas por medio del artículo 7º del Decreto ejecutivo